Proyecto de Ley 1057-2021-CR,

DICTAMEN negativo, aprobado por unanimidad recaído en el Proyecto de Ley **1057/2021-CR**, que propone otorgar al Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), la capacidad técnica de aplicar salvaguardas para proteger al consumidor y la producción nacional.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Área de Trámite y Digitalización de Documentos
06 OCT. 2022
RECIBIDO
Firma _____ Hora 5:10 p.m.

COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023

Señor Presidente:

Ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, el **Proyecto de Ley 1057/2021-CR**, presentado por el congresista José Luna Morales miembro del grupo parlamentario Podemos Perú, por el que se propone otorgar al Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), la capacidad técnica de aplicar salvaguardas para proteger al consumidor y la producción nacional.

En la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión, realizada el lunes 3 de octubre de 2022, el dictamen fue aprobado por UNANIMIDAD, con 10 votos a favor de los señores congresistas Elías Marcial Varas Meléndez, Adriana Tudela Gutiérrez, Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Auristela Ana Obando Morgan, María Elizabeth Taipe Coronado, Jorge Luis Flores Ancachi, Miguel Ángel Ciccia Vásquez, Sigrid Tesoro Bazán Narro, Arturo Alegría García y la congresista María Luisa Cordero Jon Tay quien como miembro accesitario votó por la licencia del congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay.

I. SITUACIÓN PROCESAL

1.1. Antecedentes

Mediante acuerdo del Consejo Directivo del Congreso de la República adoptada en sesión del 13 de diciembre de 2021, se actualizo el proyecto de ley N° 7362/2020-CR, asignándole el N° 1057/2021-CR, siendo derivado el 06 de enero de 2022 a la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos y a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República.

1.2. Opiniones solicitadas

1.2.1. La Comisión solicito opiniones técnicas a las siguientes instituciones:

- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), mediante Oficio N° 154-2021-2021-2022/CODECO-CR, de fecha 11 de enero de 2022.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TUDELA GUTIERREZ Adriana Josefina FAU 20161749126 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 06/10/2022 10:19:13-0500

- Ministerio de la Producción (PRODUCE), mediante Oficio N° 155-2021-2022/CODECO-CR, de fecha 11 de enero del 2022.
- Cámara de Comercio de Lima (CCL), mediante Oficio N° 156-2021-2022/CODECO-CR, de fecha 11 de enero del 2022.
- Presidencia de la Sociedad Nacional de Industrias, mediante Oficio N° 127-2021-2022/CODECO-CR, de fecha 11 de enero del 2022.
- Presidencia Ejecutiva del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), mediante Oficio PO N°158-2021-2022/CODECO-CR, de fecha 11 de enero de 2022.

1.3. Opiniones recibidas

1.3.1. La Comisión al cierre del presente informe, recibió las opiniones técnicas de las siguientes instituciones:

1. **De la Cámara de Comercio de Lima (CCL),** remitió su opinión negativa dirigido al Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, a través vía electrónica P/008.01.2022/GL, de fecha 14 de enero de 2022, suscrito por el señor Peter Anders Moores Presidente de la Cámara de Comercio de Lima –CCL.

2. **Del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)**, remitió su opinión negativa a la Secretaria de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, a través del Oficio N° Oficio N° 000043-2022-PRE/INDECOPI, de fecha 15 de febrero de 2022, suscrito por el Señor Julián Fernando Palacín Gutiérrez, Presidente Ejecutivo de la mencionada institución, el mismo que contiene el Informe N° 010-2022/CDB-INDECOPI, emitido por la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no Arancelarias, de fecha 01 de febrero de 2022.

3. **Del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)**, remitió su opinión negativa dirigido al Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, a través del Oficio N° Oficio N° 000088-2022-GEG/INDECOPI, de fecha 18 de febrero de 2022, suscrito por el Señor Julio Martin Ubillus Soriano, Gerente General (e) de la mencionada institución, el mismo que contiene el Informe N° 079-2022-OAJ/INDECOPI, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, de fecha 04 de febrero del 2022 y el Memorándum N° 0018-2022-CDB/INDECOPI y anexos.

4. **De Ministerio de la Producción - PRODUCE**, remitió su opinión negativa dirigido al Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, a través del Oficio N° 00000119-2022-PRODUCE/DM.000088-2022-GEG/INDECOPI, de fecha 04 de abril de 2022, suscrito por el Señor Jorge Luis Prado Palomino, Ministro de la Producción, el mismo que contiene el Informe N° 00000333-2022-PRODUCE/OGAJ, emitido por el Director de Políticas y Ordenamiento del mencionado Ministerio, de fecha 04 de febrero de 2022.

5. **De Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR**, remitió su opinión negativa dirigido al Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, a través del Oficio N° 213-2022-MINCETUR/DM, de fecha 04 de junio de 2022, suscrito por el Señor Roberto Helbert Sánchez, Ministro de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, el mismo que contiene el Informe N° 0022-2022-MINCETUR/SG-MAG, adjuntando el Memorándum, N° 168-2022-MINCETUR/SG/AJ-MAG.

1.4. Otras opiniones recibidas y documentos analizados

1.4.1. La Comisión recibió otras opiniones técnicas:

De la Sociedad de Comercio Exterior del Perú – COMEX, remitió su opinión negativa a través de la Carta N° 10-2022/GG/COMEXPERÚ, de fecha 07 de enero de 2022, suscrita por la Señora Jessica Luna Cárdenas, Gerente General de la mencionada entidad.

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

2.1. Resumen

Mediante el Proyecto de Ley 1057/2021-CR, se propone otorgar al Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOP *(en adelante INDECOPI)*, la capacidad técnica de aplicar salvaguardas para proteger al consumidor y la producción nacional. El Proyecto de Ley 1057/2021-CR, contiene tres artículos, una disposición complementaria derogatoria y una disposición complementaria final.

La iniciativa legislativa bajo análisis prescribe lo siguiente:

PROYECTO DE LEY 1071/2021-CR
Artículo 1°.- Objeto La presente Ley, tiene por objeto otorgar al Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOP, la capacidad técnica de aplicar salvaguardas para proteger al consumidor y la producción nacional. **Artículo 2°- Del Informe Técnico** Los hallazgos y/o comprobaciones de la Comisión Dumping y Subsidios (CDS) del INDECOPI con respecto al cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos

para imponer salvaguardias provisionales y/o definitivas en el marco de la Organización Mundial de Comercio, son incuestionables e incontrovertibles, siempre y en todos los casos.

Artículo 2°.- De la Aplicación de Salvaguardias
La Comisión Multisectorial creada por Decreto Supremo N°020-98-ITINCI, no puede cuestionar, controvertir o desestimar nada de lo consignado en el Informe Técnico de la CDS que recomienda imponer salvaguardias provisionales y/ definitivas, debiendo aplicar las recomendaciones que se derivan del Informe Técnico respectivo.

Disposición Complementaria Derogatoria
Única.- De la derogatoria de normas
Deróguese toda norma y disposición legal que se oponga a la presente Ley.

Disposición Complementarias Finales
Primera.- La presente Ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

III. MARCO NORMATIVO

La propuesta normativa, será rigurosamente analizada bajo los alcances del siguiente marco normativo:

- Constitución Política del Estado.
- Reglamento del Congreso de la República.
- Los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio – OMC.
- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.
- Decreto Supremo N°020-98-ITINCI, modificado por el Decreto Supremo N°017-2004-MINCETUR. Que aprueban normas reglamentarias de los Acuerdos de Salvaguardias y de Textiles y Vestidos de la Organización Mundial del Comercio.
- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, aprobado por Ley N° 27790.
- Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por Decreto Legislativo N° 183.
- Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización de Funciones del Ministerio de la Producción y sus modificatorias.

IV. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA

El Proyecto de Ley 1057/2021-CR, se justifica fundamentalmente, en la protección del consumidor individual cuando sus derechos son afectados en una transacción comercial particular; pero también se busca proteger a los consumidores en su conjunto, cuando sus derechos son perjudicados debido a que el mercado se encuentra artificialmente distorsionado como consecuencia de las prácticas de comercio desleales y deshonestas; asimismo, busca proteger nuestra producción nacional.

Asimismo, la propuesta legislativa, pretende otorgar al INDECOPI, la capacidad técnica de aplicar salvaguardas para proteger al consumidor y la producción nacional.

Con ello, no busca modificar la organización o la estructura del INDECOPI y/o de la Comisión de Dumping, Subsidios, Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias (en adelante, la **CDS)**. Mas por el contrario sobre la base del Decreto Supremo N°020-98-ITINCI, busca precisar los alcances de las facultades y competencias otorgadas a la **CDS** en materia de salvaguardias; Tampoco, busca modificar la legislación nacional en materia de salvaguardias, ni los compromisos sobre el particular asumidos por el Perú con la Comunidad Andina, la Organización Mundial de Comercio (en adelante, la OMC), y/o los compromisos asumidos con nuestros socios comerciales en virtud de los acuerdos comerciales suscritos con ellos.

Siendo ello así, volviendo a precisar en este extremo, la presente propuesta legislativa se sustenta en la urgencia y necesidad de precisar claramente que el Decreto Supremo N°020-98-ITINCI, no faculta a la Comisión Multisectorial para controvertir, cuestionar y/o desestimar los hallazgos y comprobaciones a los que llega la CDS, que se consignan en su Informe Técnico y que recomiendan la imposición de salvaguardias provisionales y/o definitivas.

Su dación se encuentra debidamente dentro del marco constitucional, es decir dentro de los artículos 65° y 69° de la Constitución Política[1].

V. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA

5.1. Análisis Técnico

5.1.1. Control de cumplimiento de las exigencias establecidas en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso.

Conforme a lo establecido en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de loa República[2], se ha podido evidenciar, prima facie, que el Proyecto de Ley 1057/2021-CR, cumple con las exigencias señaladas en los mencionados artículos, es decir: (i) la exposición de motivos contiene los fundamentos de la propuesta de ley, (ii) los efectos de la vigencia de la norma que se propone sobre el ordenamiento jurídico; y, (iii) así como el análisis costo beneficio.

La primera conclusión a la que podemos arribar, consiste en que el proyecto de ley mencionado, objeto del presente pre dictamen, cumple someramente

---

[1] COSTITUCION POLITICA DEL PERU
Rol Económico del Estado
Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. (...).
Protección al consumidor
Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. (...).
Principio de Legalidad
"**Artículo 74.-** Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo (...).

[2] REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Artículo 75. Requisitos y presentación de las proposiciones.
Artículo 76. Requisitos especiales.

con lo dispuesto en los artículos 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la República.

5.1.2. Compatibilidad constitucional e idoneidad legislativa.

Artículo 74° de la Constitución Política[3], establece que "Los tributos se crean, modifican o derogan o se establece una exoneración, exclusiva por ley o decreto legislativo en el caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo... (...)[4].

> **Artículo 118°** de la Constitución Política, "corresponde al Presidente de la República: (...)[5].
> 11. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; y celebrar y ratificar tratados.
> (...).
> 20. Regular tarifas arancelarias.

Al respecto, es de precisar previamente que las medidas de salvaguardias se materializan mediante el incremento de la tarifa arancelaria aplicable a las importaciones de determinados productos o a través del establecimiento de un volumen máximo de importaciones, cuyos efectos incidirían en la política de comercio exterior del país. En ese sentido estando dentro del marco constitucional, la decisión de imponer medidas de salvaguarda corresponde a competencias del Poder Ejecutivo, consistentes en dirigir la política exterior y regular las tarifas arancelarias.

5.1.3. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Las autoridades, funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política del Perú, a las leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico, asimismo desarrollan sus funciones dentro de las facultades que les estén conferidas.[6]

Los artículos I y IV del Título Preliminar de la citada Ley, establece que las entidades que conforman el Poder Ejecutivo se rigen, entre otros, por el Principio de Legalidad, según el cual las autoridades, funcionarios y servidores del referido poder, están sometidos a la Constitución Política del Perú, entre otros como, por el Principio de Competencia, en virtud del cual cada entidad ejerce sus funciones y atribuciones sin intervenir en aquellas que son cumplidas por los otros niveles de gobierno o sectores.

5.1.4. Decreto Legislativo que aprueba la ley de organización y funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

---

[4] Artículo 74°, Capítulo IV del Título III de la Constitución Política del Perú
[5] Artículo 118°, Capítulo IV del Título IV de la Constitución Política del Perú
[6] Artículo I y IV del Título Preliminar de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

El INDECOPI, es un organismo público especializado con personería jurídica de derecho público interno, goza de autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa. Se encuentra adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y rige su funcionamiento de acuerdo con las disposiciones contenidas a su presente le y sus normas complementarias y reglamentarias.[7]

El Instituto INDECOPI, cuenta con el servicio de atención al cliente: la Comisión de Protección al Consumidor, el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, **la Comisión de Dumping, Subsidios, Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias**, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, y las distintas Salas del Tribunal.

En tal sentido, en el numeral 26.1 del artículo 26, precisa que, corresponde a **la Comisión de Dumping, Subsidios, Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias (en adelante, CDB),** velar por el cumplimiento de las normas que persiguen evitar y corregir el daño en el mercado provocado por prácticas de dumping o subsidios, a través de la imposición de derechos antidumping o compensatorios actuar como autoridad investigadora en procedimientos conducentes a la imposición de medidas de salvaguardia; y, efectuar el control posterior y eliminación de barreras comerciales no arancelarias, de conformidad con lo dispuesto en los acuerdos internacionales suscritos por el Perú, los compromisos contraídos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio y las normas supranacionales y nacionales vigentes correspondientes.

5.1.5. <u>Decreto Supremo N°020-98-ITINCI, modificado por el Decreto Supremo N°017-2004-MINCETUR. Que aprueban normas reglamentarias de los Acuerdos de Salvaguardias y de Textiles y Vestidos de la Organización Mundial del Comercio (en adelante el Reglamento de Salvaguardias).</u>

Como cuestión previa, debemos de precisar que la normatividad multilateral de la Organización Mundial de Comercio (en adelante la (OMC), define a las salvaguardias son medidas de protección que imponen los estados, cuando se producen un incremento inusitado en las importaciones que causan daño grave a una rama de la producción nacional. Para la imposición de una salvaguarda, se debe verificar que esta cumpla con requisitos técnicos: 1. Incremento significativo de las importaciones investigadas, 2. Daño o amenaza de daño grave a la rama de producción nacional y, 3. La relación de causalidad entre los elementos antes mencionados.

Estas medidas de salvaguardia pueden consistir en un gravamen arancelario, una restricción cuantitativa sobre las importaciones del producto investigado, cualquiera sea su origen.

[7] Artículo 1 del DL N° 1033

El artículo 8 del Acuerdo de Salvaguardias de la OMC, dispone que ante la imposición de una medida de salvaguardia, se exige que el Estado que proponga aplicar dicha medida, dará oportunidades adecuadas para celebrar consultas con las autoridades de los países que tengan interés sustancial como exportadores del producto investigado, a fin de intercambiar opiniones sobre la medida y llegar a un entendimiento sobre la compensación comercial de los efectos desfavorables de la medida.

Como se puede apreciar, las medidas de salvaguardia se materializan mediante el incremento de la tarifa arancelaria aplicable a las importaciones de determinados productos o a través del establecimiento de un volumen máximo de importaciones, cuyos efectos incidirán en la política de comercio exterior del país. En ese sentido, y en concordancia con las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, la decisión de imponer medidas de salvaguardia en el país corresponde a competencias exclusivas del Poder Ejecutivo, consistentes en dirigir la política exterior y regular las tarifas arancelarias.

Ahora bien, el artículo 6 del Reglamento sobre Salvaguardias, precisa que el procedimiento para la aplicación de medidas de salvaguardia contempla dos fases claramente diferenciadas: **Una fase de investigación**, a cargo de la CDB; y, **Una fase de decisión o resolución**, a cargo de la Comisión Multisectorial conformada por los Ministros de Estado de las carteras de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Economía y Finanzas (MEF) y del sector al que corresponde la rama de producción nacional afectada por las importaciones (en adelante, Comisión Multisectorial). Con mayor precisión los artículos 7 y 20 de la citada norma, prescribe que las decisiones relativas a la aplicación, suspensión y revocación de medidas de salvaguardias, entre otros, será competencia exclusiva de la Comisión Multisectorial y se adoptarán basándose en el informe técnico elaborado por la autoridad investigadora como resultado de la investigación realizada.

Finalmente, los artículos 35 y 37 de la citada norma, precisa que luego que la CDB, remite su Informe Técnico con la recomendación de aplicar o no las medidas de salvaguardia, la Comisión Multisectorial debe evaluar si opta por aplicar las medidas de salvaguardia correspondientes. Para ello, la Comisión Multisectorial debe analizar otros elementos distintos a los requisitos técnicos previstos en la normativa sobre salvaguardias. En efecto, la Comisión Multisectorial debe evaluar el interés público, los efectos que la imposición de la medida de salvaguardia puede generar en el país, así como las relaciones comerciales con los terceros países eventualmente afectados. Además, en caso se opte por la aplicación de medidas de salvaguardia, la Comisión Multisectorial debe celebrar consultas con las autoridades de los países que tengan interés sustancial como exportadores del producto investigado.

5.1.6. Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por Decreto Legislativo N° 183.

El artículo 5 de la citada Ley, prescribe que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la tributación, política aduanera, financiación, endeudamiento, presupuesto, tesorería y contabilidad, así como armonizar la economía nacional.

Al respecto, si bien el Reglamento sobre Salvaguardias establece que la decisión de la Comisión Multisectorial se adoptará basándose en el informe técnico elaborado por la CDB como resultado de la investigación realizada, dicha norma también es clara en señalar que, la Comisión Multisectorial deberá evaluar otros elementos de índole político que determinen la conveniencia o no de aplicar medidas de salvaguardia.

5.1.7. La Problemática

La presente propuesta, se sustenta en otorgar al INDECOPI, la capacidad técnica de aplicar salvaguardias para proteger al consumidor y la producción nacional. Mediante la urgencia y necesidad de precisar claramente que el Decreto Supremo N° 020-98-ITINCI no faculta a la Comisión Multisectorial para controvertir, cuestionar y/o desestimar los hallazgos o comprobaciones a las que llega la CDS, que se consigna en su Informe Técnico y que recomienda la imposición de salvaguardias provisionales y/o definitivas.

5.1.8. Planteamiento de soluciones a la problemática.

La iniciativa legislativa, materia de análisis, plantean la iniciativa de facultar a INDECOPI, la capacidad técnica de aplicar salvaguardias para proteger al consumidor y la producción nacional.

PROYECTO DE LEY 1057-2021-CR
El Proyecto de Ley busca que el INDECOPI, tenga la capacidad técnica de aplicar salvaguardias para proteger al consumidor y producción nacional, derivado de los hallazgos y/o comprobaciones de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias – CDB+, con respecto a cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos, para imponer salvaguardias provisionales y/o definitivas en el marco de la Organización Mundial de Comercio; señalando asimismo que la Comisión Multisectorial creada por Decreto Supremo N° 020-98-ITINCI, este impedida de cuestionar, controvertir o desestimar nada de lo consignado en el Informe Técnico de la CDB.

5.2. Análisis de las opiniones

5.2.1. La Cámara de Comercio de Lima (CCL), sostiene observaciones a la propuesta legislativa, señalando lo siguiente:
La iniciativa legislativa en referencia, contraviene lo dispuesto por el artículo 118° de la Constitución Política, en razón que, la política exterior y las relaciones internacionales; como celebrar y ratificar tratados, así como regular las tarifas arancelaria, corresponde al Presidente de la República. En efecto, la imposición de salvaguardias se ejerce como un mecanismo de carácter político, si bien, sobre la de base a un informe técnico emitido por INDECOPI, pero es el Poder Ejecutivo quien determina finalmente la imposición de las mismas, en función de sus implicancias y repercusión en las relaciones con los Estados que resulten o puedan resultar afectados por las mismas y las posibles represalias que éstos pudieran adoptar en contra los productos peruanos.

Concluyendo, que a mayor abundamiento, el artículo 5° de la Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, precisa que "Corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la tributación, política aduanera, financiación, endeudamiento, presupuesto, tesorería y contabilidad, así como armonizar la actividad económica nacional. Asimismo, le corresponde planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la política arancelaria, en coordinación con el Ministerio de Industria, Comercio, Turismo e Integración y con el ministro del sector interesado, cuando corresponda".

En tal sentido consideran que el proyecto de ley bajo comentario pretende sustraer una facultad exclusiva del Presidente de la República, prevista constitucionalmente y desarrollada en una Ley Orgánica.

5.2.2. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), adjunta: Informe N° 010-2022/CDB-INDECOPI, emitido por la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no Arancelarias, el Informe N° 079-2022-OAJ/INDECOPI, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, de fecha 04 de febrero del 2022 y el Memorándum N° 0018-2022-CDB/INDECOPI y anexos, concluyendo lo siguiente:

<u>En relación a la regulación sobre salvaguardias a nivel multilateral</u>, que si bien es cierto, que de conformidad con lo lo dispuesto en los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio - OMC, los países miembros de dicha organización, entre ellos el Perú, pueden emplear los instrumentos de defensa comercial establecidos en dichos Acuerdos, a fin de contrarrestar el daño que las importaciones causen a sus industrias locales. Pero, enfatiza que la salvaguardia es una medida de protección que imponen los Estados cuando se produce un incremento inusitado en las importaciones que causa daño grave a una rama de producción nacional. Asimismo, a diferencia de los otros procedimientos en materia de defensa comercial procedimientos por dumping y subvenciones para la imposición de medidas de salvaguardia no se exige

demostrar la existencia de prácticas desleales de comercio, sino que se requiere comprobar que el incremento súbito de las importaciones es la causa sustancial del daño experimentado por la industria local.

Además, dado que las medidas de salvaguardia se aplican en casos en los que no es necesario que exista una práctica desleal de comercio, la decisión de aplicar tales medidas debe considerar, además del daño real o potencial a la rama de producción nacional, los efectos que una decisión de esa naturaleza puede causar en los otros agentes del mercado *(como los demás integrantes de la cadena productiva, los consumidores y los países exportadores)*, así como otros argumentos de interés. Para efectos de imponer una medida de salvaguardia, el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC establece que debe verificarse el cumplimiento de los siguientes requisitos técnicos: (i) incremento significativo de las importaciones investigadas: (ii) daño o amenaza de daño grave a la rama de producción nacional - RPN; y. (iii) la relación de causalidad entre los elementos antes mencionados.

Por otro lado, debido a que los efectos de una medida de salvaguardia incidirán en la política arancelaria de un Estado, los países miembros interesados podrán acordar cualquier medio adecuado de compensación comercial de los efectos desfavorables de la medida de salvaguardia en cuestión sobre su comercio, conforme lo establece el artículo 8 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC. Por tal motivo, antes de la imposición de una medida de salvaguardia, el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC exige que el Estado que se proponga aplicar dicha medida dará oportunidades adecuadas para celebrar consultas con las autoridades de los países que tengan interés sustancial como exportadores del producto investigado, a fin de intercambiar opiniones sobre la medida y llegar a un entendimiento sobre la compensación comercial de los efectos desfavorables de la medida. Cabe indicar que, las medidas de salvaguardia se aplican por un periodo máximo de cuatro (4) años, y se aplican únicamente durante el periodo que sea necesario para prevenir o reparar el daño grave y facilitar el plan de reajuste que debe cumplir la industria nacional afectada con las importaciones. Mediante dicho plan de reajuste, las empresas que conforman la industria afectada se comprometen a la facilitación de la transferencia más ordenada de sus recursos hacia fines más productivos, así como aumentar su competitividad.

En este extremo, precisa que las medidas de salvaguardia se materializan mediante el incremento de la tarifa arancelaria aplicable a las importaciones de determinados productos o a través del establecimiento de un volumen máximo de importaciones, cuyos efectos incidirán en la política de comercio exterior del país. En ese sentido, y en concordancia con las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, la decisión de imponer medidas de salvaguardia en el país corresponde a competencias exclusivas del Poder Ejecutivo, consistentes en dirigir la política exterior y regular las tarifas arancelarias".

En relación al procedimiento de investigación sobre salvaguardias, precisa que las investigaciones sobre salvaguardias en el Perú se rigen por el Decreto Supremo N° 020-98 ITINCI, modificado por Decreto Supremo Nº 017-2004-MINCETUR (en adelante, el Reglamento de salvaguardias), que regulan en el ámbito nacional el Acuerdo sobre salvaguardias de la OMC.

Sostiene, que según lo previsto en el Reglamento sobre Salvaguardias, el procedimiento para la aplicación de medidas de salvaguardia contempla dos fases claramente diferenciadas: **una fase de investigación**, a cargo de la CDB; y **una fase de decisión o resolución**, a cargo de la Comisión Multisectorial conformada por los Ministros de Estado de las carteras de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Economía y Finanzas (MEF) y del sector al que corresponde la rama de producción nacional afectada por las importaciones (en adelante, Comisión Multisectorial). En la primera fase del procedimiento, la CDB es la autoridad competente para decidir el inicio de la investigación y la responsable de conducir y desarrollar la investigación en cuestión, para lo cual realiza un conjunto de actuaciones establecidas en el Reglamento sobre Salvaguardias, a efectos de recopilar información necesaria para el análisis de los elementos técnicos previstos en la normativa sobre salvaguardias. Dicho procedimiento se desarrolla por un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de publicación de la resolución que dispone el inicio del procedimiento, y concluye con la emisión de un Informe Técnico mediante el cual la CDB recomienda la aplicación o no de las medidas de salvaguardia correspondientes. En la segunda fase del procedimiento, la Comisión Multisectorial cumple el rol de autoridad resolutiva, pues es a dicho órgano al cual el Reglamento sobre Salvaguardias le confiere exclusivamente la potestad de decidir la aplicación o no de las medidas solicitadas.

Así, luego que la CDB, remite su Informe Técnico con la recomendación de aplicar o no las medidas de salvaguardia, la Comisión Multisectorial debe evaluar si opta por aplicar las medidas de salvaguardia correspondientes. Para ello, la Comisión Multisectorial debe analizar otros elementos distintos a los requisitos técnicos previstos en la normativa sobre salvaguardias. En efecto, la Comisión Multisectorial debe evaluar el interés público, los efectos que la imposición de la medida de salvaguardia puede generar en el país, así como las relaciones comerciales con los terceros países eventualmente afectados. Además, en caso se opte por la aplicación de medidas de salvaguardia, la Comisión Multisectorial debe celebrar consultas con las autoridades de los países que tengan interés sustancial como exportadores del producto investigado, conforme lo dispone en artículo 37 del Reglamento sobre Salvaguardias.

Concluyendo, que en los procedimientos en materia de salvaguardia existe una separación de funciones entre la CDB y la Comisión Multisectorial. Ello, pues la CDB ejerce únicamente función administrativa consistente en llevar a cabo la investigación del procedimiento sobre salvaguardias, mientras que la Comisión Multisectorial conformada por tres (03) Ministros Estado, al momento de optar

por la imposición o no de la medida de salvaguardia, ejerce funciones que exceden la función administrativa dado que debe realizar un análisis de conveniencia (por interés público y efecto en las relaciones comerciales internacionales) de la aplicación de la medida de salvaguardia. 3. Las disposiciones del proyecto de ley.

En relación a las disposiciones del proyecto ley, precisa que si bien esta tiene por objeto otorgar al Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) la capacidad técnica de aplicar Salvaguardas para proteger al consumidor y la producción nacional y por finalidad que la Comisión Multisectorial, aplique automáticamente las recomendaciones contenidas en el Informe Técnico elaborado por la CDB, respecto de la aplicación de medidas de salvaguardia. En ese sentido, propone que el Informe Técnico no pueda ser cuestionado por la Comisión Multisectorial bajo ningún supuesto.

Finalmente, concluye que, la propuesta del proyecto de ley referida a que la Comisión Multisectorial no puede cuestionar, controvertir o desestimar los hallazgos consignados en el informe técnico elaborado por la CDB, debiendo aplicar las recomendaciones que se derivan del Informe Técnico respectivo, impediría que se efectúe el análisis, y que debido a su naturaleza, debe ser realizado por una autoridad política, como es el caso de la Comisión Multisectorial. En tal sentido, el proyecto ley establece una disposición que no se ampara en las normas que regulan la aplicación de la medidas de salvaguardias en el marco del acuerdo sobre salvaguardias de la OMC, considerando que no es viable su aprobación.

5.2.3. **El Ministerio de la Producción – PRODUCE**, adjunta el Informe N° 0000013-2022-PRODUCE/DN, emitido por el Director de la Dirección de Normatividad. Sobre el proyecto de ley en comento, sostiene que, el Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI; establece en su artículo 26 que la CDS es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas que persiguen evitar y corregir el daño en el mercado provocado por prácticas de dumping o subsidios, a través de la imposición de derechos antidumping o compensatorios; actuar como autoridad investigadora en procedimientos conducentes a la imposición de medidas de salvaguardia; y, efectuar el control posterior y eliminación de barreras comerciales no arancelarias, de conformidad con lo dispuesto en los acuerdos internacionales suscritos por el Perú, los compromisos contraídos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio, y las normas supranacionales y nacionales vigentes correspondientes.

Refiere también, que de conformidad con el Capítulo II del Decreto Supremo N° 020-98-ITINCI, para la obtención de una medida de salvaguardia de carácter general se debe iniciar un procedimiento de investigación ante la CDS con la finalidad de determinarse si las importaciones de un producto,

independientemente del país del cual procedan, aumentan en tal cantidad y se realizan en tales condiciones que causan o amenazan causar daño grave a una rama de la producción nacional. Al finalizar el procedimiento de investigación la CDS que actúa exclusivamente como autoridad investigadora - emitirá un Informe Técnico no vinculante que contendrá sus recomendaciones para la aplicación o no de una medida de salvaguardia general. Dicho informe debe ser puesto en conocimiento de la Comisión Multisectorial. La precitada Comisión, de conformidad con el artículo 5 del Decreto Supremo N° 020-98-ITINCI está conformada por el ministro de Economía y Finanzas (en adelante, MEF), el Ministro de Comercio Exterior y Turismo (en adelante, MINCETUR) y el Ministro del Sector al que pertenezca la rama de producción nacional afectada. Las decisiones respecto a la aplicación o no tomadas por dicha Comisión se formalizarán mediante Decreto Supremo del MINCETUR refrendado por los ministros de la Comisión Multisectorial.

Sobre las competencias de la Comisión Multisectorial y la CDS; La CDS, de acuerdo al artículo 6 del Reglamento, se constituye en la autoridad investigadora que, como tal, tiene la función de conducir la investigación que se desarrolla dentro de un procedimiento para la aplicación de las medidas de salvaguardia. Por su parte, la Comisión Multisectorial, de acuerdo al artículo 7 del Decreto Supremo N° 020-98-ITINCI, tiene competencia exclusiva en la aplicación, suspensión y revocación de medidas de salvaguardia, así como la modificación o prórroga de los plazos correspondientes a la aplicación de las mismas, basándose en el informe técnico elaborado por la CDS como resultado de la investigación realizada.

En esa línea, el artículo 29 del Decreto Supremo N° 020-98-ITINCI señala que, sobre la base del Informe Técnico Preliminar emitido por la CDS, la Comisión decidirá si aplica o no las medidas de salvaguardia provisional en el plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la remisión del informe técnico por parte de la Autoridad Investigadora.

De igual manera, el artículo 30 del Decreto Supremo N° 020-98-ITINCI dispone que la decisión acerca de la adopción de medidas provisionales es tomada por la Comisión en base al Informe Técnico preliminar realizado por la Autoridad Investigadora. Es decir, la legislación actual prevé claramente el marco y naturaleza de las competencias tanto de la CDS, en su condición de autoridad investigadora, y la Comisión Multisectorial, a cargo de la etapa decisoria.

Sin embargo, y conforme se advierte del Proyecto de Ley, éste pretende concentrar la instancia investigadora y la decisoria en la CDS, restringiendo la función de la Comisión Multisectorial, pese a que el rol de ésta última va más allá de las funciones asignadas a la autoridad investigadora, al tener que conjugar los hechos que sustentan el informe técnico con el interés público, las obligaciones asumidas frente a la OMC y los efectos de la imposición de tales medidas, tanto en el ámbito nacional como respecto de las relaciones

comerciales con los países eventualmente afectados; por lo que no es razonable ni técnico convertir a esta Comisión en una instancia cuyo único rol sería tomar conocimiento ejecutar lo dispuesto en el informe de la CDS, desnaturalizando así el procedimiento de aplicación de salvaguardias, desarrollado en el marco de la Resolución Legislativa N 26407, lo cual puede acarrear graves consecuencias a nuestro país ante la comunidad internacional.

Adicionalmente, precisa que, la existencia de una autoridad investigadora y una autoridad que imponga la medida de salvaguardia, se encuentra en consonancia con la política adoptada por otros países miembros, socios comerciales de nuestro país, como Colombia, Chile y México, además también Argentina, Ecuador, Estados Unidos y la Unión Europea, según se aprecia de sus respectivas legislaciones.

Sobre la obligación de garantizar consultas a los miembros de la OMC, al respecto señala que el artículo 37 del Decreto Supremo N° 020-98-ITINCI prescribe que el gobierno peruano antes de imponer o prorrogar una medida de salvaguardia definitiva, dará oportunidad adecuada para que se celebren consultas con los miembros de la OMC que tengan interés sustancial como exportadores del producto de que se trate, las mismas que tienen como finalidad, entre otros: (1) examinar la información proporcionada por las notificaciones al Comité de Salvaguardias; (ii) intercambiar opiniones sobre la medida; y, (iii) llegar a un entendimiento sobre la forma de alcanzar el objetivo del mantenimiento por parte del Perú, del nivel de sus concesiones y otras obligaciones en virtud del GATT de 1994. Asimismo, el precitado artículo señala que, el gobierno del Perú notificará inmediatamente al Consejo de Comercio de Mercancías de la OMC los resultados de las consultas. Incluyendo cualquier compensación que se otorgue, de ser el caso. En merito a ello, durante el desarrollo de las etapas de investigación y decisoria, el Estado Peruano está en la obligación de garantizar que los miembros de la OMC que puedan estar interesados, realicen consultas y se permita el intercambio de opiniones entre países sobre la probable aplicación de la medida (salvaguardia); intercambio que se realiza "entre pares" a través de los representantes de cada país miembro y requiere contar con la capacidad de negociar en representación del Estado Peruano a nivel internacional.

Motivo por el cual, advierte que, de aprobarse el Proyecto de Ley no podría llevarse a cabo el proceso de consultas ante la OMC, en la medida que no se podría cuestionar, controvertir o desestimar nada de lo consignado en el Informe Técnico de la CDS, conforme la propuesta planteada en el Proyecto de Ley. Contraviniendo con ello el Acuerdo incorporado a la legislación nacional mediante Resolución Legislativa N° 26407.

Sobre los Principios de Legalidad y Competencia previstos en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo: sostiene que los artículos I y VI del Título Preliminar de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,

establecen que los ministerios únicamente pueden ejercer las competencias que le han sido atribuidas a través de la Constitución Política del Perú y la Ley. Por lo que considera, que el Proyecto de Ley podría afectar el ejercicio de las siguientes competencias y funciones de los miembros de la Comisión Multisectorial: El Decreto Legislativo N° 183. Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, establece en su artículo 5 que corresponde a dicho sector planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la política arancelaria, así como armonizar la actividad económica nacional; norma concordante con lo establecido por el artículo 2, inciso f) del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del MEF, aprobado por Resolución Ministerial N 213-2020-EF-41. Asimismo, el artículo 1 del Decreto Ley N° 25909 establece que ninguna entidad, con excepción del MEF, puede irrogarse la facultad de dictar medidas destinadas a restringir o impedir el libre flujo de mercancías mediante la imposición de trámites, requisitos o medidas de cualquier naturaleza que afecten las importaciones o exportaciones; siendo nulos todos los actos que contravengan lo dispuesto en dicho artículo. MINCETUR: Es el sector encargado de definir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política de comercio exterior, según lo previsto por el artículo 2 de la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del MINCETUR, comprendiendo sus funciones la de emitir opinión técnica vinculante e intervenir en la formulación de políticas, acciones y propuestas normativas que tengan incidencia determinante respecto a materias o actividades del ámbito de competencia, según el artículo 5, inciso 10) del precitado cuerpo legal.

El Ministerio del Sector al que pertenezca la rama de producción nacional afectada: se estaría afectando las competencias del tercer miembro de la Comisión Multisectorial, teniendo en consideración que según el artículo 5 del Decreto Supremo N° 020-98-ITINCI; para lo cual, resulta fundamental conocer el alcance real de la propuesta y su incidencia en las competencias de todos los ministerios, cuidando de no contravenir disposiciones contenidas en la Constitución Política del Perú y en leyes orgánicas, las cuales requieren una votación especial para su aprobación, tal como es la LOPE. Aunado a lo ya mencionado, se advierte que el INDECOPI, a través de la CDS, no podría disponer la aplicación de medidas de salvaguardias, cuya ejecución se efectúa a través de la aplicación de un arancel, teniendo en cuenta las competencias atribuidas por las precitadas Leyes; ello más aun, teniendo en consideración que, según lo previsto en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú referido al régimen tributario y presupuestal, los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Por tanto, atendiendo a las disposiciones legales establecidas en la materia, se estima que lo regulado en el Proyecto de Ley representa una competencia que debería ser ejercida mediante la emisión de un decreto supremo refrendado por los ministros de Estado de los sectores involucrados y firmado por el Presidente de la República, en su calidad de Jefe del Poder Ejecutivo.

Asimismo, en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley se señala que éste no busca modificar la organización o la estructura del INDECOPI y/o la CDS; sin embargo, no se efectúa el análisis correspondiente sobre la relación al impacto de las modificaciones propuestas al desarrollar el apartado referente al "Efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional"; ello pese a que, de aprobarse la iniciativa legislativa, implicaría una modificación al artículo 26, numeral 26.1 de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, al otorgarse una nueva función a la CDS, lo cual vulneraria el principio de legalidad que establece que el ejercicio de un poder público debe realizarse conforme a la ley y al derecho.

Adicionalmente, según el artículo 22 de la LOPE, los ministerios son organismos del Poder Ejecutivo que comprenden uno o varios sectores, considerando su homogeneidad y finalidad; los cuales diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas. En tal sentido, en el ámbito de competencia y estructura básica de cada uno de los Ministerios se establece en su respectiva ley de organización y funciones; por lo que, de producirse una variación de tales competencias conforme se plantea en el Proyecto de Ley, tendría necesariamente que procederse a su vez con una modificación de las leyes de organización y funciones de los diversos ministerios aludidos. Cabe agregar que, esto último no ha sido objeto de desarrollo y análisis en la exposición de motivos del proyecto de ley bajo comentario.

De igual forma, considera importante realizar las siguientes observaciones a la Exposición de Motivos que acompaña al Proyecto de Ley bajo análisis: La justificación de la propuesta legislativa "(...) se sustenta en la urgencia y necesidad de precisar claramente que Decreto Supremo N° 020-98-ITINCI no faculta a la Comisión Multisectorial para controvertir, cuestionar y/o desestimar los hallazgos o comprobaciones a las que llega la CDS (...)", sin embargo, conforme se desprende de los artículos 7 y 29 del Decreto Supremo N° 020-98-ITINCI, se advierte que no resulta necesaria ninguna aclaración al respecto, en la medida que dichas disposiciones establecen expresamente que es la Comisión Multisectorial quien decide si aplica o no las medidas de salvaguardia, basándose en el informe técnico elaborado por la CDS (Autoridad Investigadora). Es decir, se encuentran claramente definidas las facultades investigadoras y decisorias, a cargo de la CDS y la Comisión Multisectorial, respectivamente, no existiendo vacío legal ni aspecto que requiera de aclaración alguna. En el apartado "Efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional", el Proyecto de Ley precisa que se pretende "(...) promover la libre competencia y la eficacia en el mercado de productos farmacéuticos así como la eficiencia de los mismos para beneficio de los consumidores y de la sociedad en su conjunto."; sin embargo, ello no guarda relación con la naturaleza de las salvaguardias que constituyen un mecanismo de protección ante un daño o amenaza de daño grave a una rama de producción nacional por el aumento súbito de las importantes.

En consecuencia, concluye que en mérito de lo expuesto en el presente informe y en concordancia con lo opinado por la DP y la DGDE, esta Dirección considera que la aprobación del Proyecto de Ley resultaría desfavorable; toda vez que, las disposiciones normativas contenidas en el Decreto Supremo N° 020-98-ITINCI se contradicen con el objetivo que persigue el Proyecto de Ley, lo cual implicaría no sólo vulnerar competencias atribuidas en forma exclusiva al Poder Ejecutivo, así como a los respectivos sectores involucrados, sino contravenir a lo establecido en el "Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y los Acuerdos Comerciales Multilaterales contenidos en el Acta Final de la Ronda Uruguay, incorporado a la legislación nacional mediante Resolución Legislativa N° 26407. Sin perjuicio a lo anterior, atendiendo a lo establecido en la normativa citada, y considerando la conformación de la Comisión Multisectorial creada en el marco del Decreto Supremo N° 020-98-ITINCI, corresponde también que el MEF y MINCETUR emitan su pronunciamiento respectivo, en el marco de sus competencias.

Concluyendo que, en mérito de las opiniones técnicas emitidas por la Dirección General de Desarrollo Empresarial y la Dirección de Políticas, esta Dirección emite opinión desfavorable al Proyecto de Ley N° 1057/2021-CR, porque vulneraria las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 020-98-ITINCI las competencias atribuidas en forma exclusiva al Poder Ejecutivo, así como a los respectivos sectores involucrados, además de contravenir a lo establecido en el "Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y los Acuerdos Comerciales Multilaterales contenidos en el Acta Final de la Ronda Uruguay", incorporado a la legislación nacional mediante Resolución Legislativa N° 26407

5.2.4. **El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR**, adjunto el Informe N° 0022-2022-MINCETUR/SG-MAG, de los aspectos más relevantes se precisa lo siguiente:

Explica que del estudio del proyecto de ley, se advierte una contradicción entre los artículos 1 y 3 del Proyecto de Ley: De acuerdo al artículo 1 del Proyecto de Ley, el INDECOPI, a través de la CDS, aplicaría las medidas de salvaguardia (y no la Comisión Multisectorial); sin embargo, el artículo 3 del Proyecto de Ley, señala que la Comisión Multisectorial no puede cuestionar, controvertir o desestimar el Informe Técnico de la CDS, debiendo aplicar las recomendaciones que se derivan del mismo.

Por tanto, a pesar que la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley señala que no se busca modificar la organización o la estructura del INDECOPI y/o la CDS, y tampoco la legislación nacional en materia de salvaguardias, de entrar en vigencia se estarían modificando tácitamente las competencias del INDECOPI, establecidas en el artículo 26 del Decreto Legislativo 1033, Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, y en el artículo 43 de su ROF.

Asimismo, señala que, resulta consistente con la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, y la Ley de Organización y Funciones del MINCETUR, que sea la Comisión Multisectorial la encargada de decidir si aplica o no una medida de salvaguardia (decisión que se materializa con un decreto supremo), y no el INDECOPI, por lo siguiente: Cuando la Comisión Multisectorial aplica medidas de salvaguardia se basa no solo en el informe elaborado por la Autoridad Investigadora (la CDS), sino que también evalúa: (i) el interés público general; y, (ii) los efectos de la imposición de las medidas tanto en el ámbito nacional como respecto de las relaciones comerciales con los países eventualmente afectados, sobre todo en los casos en que, por efecto de la aplicación de la salvaguardia, se exceda el nivel arancelario consolidado por el Perú en la OMC. (Artículos 7 y 35 del DS), una medida de salvaguardia consiste en la aplicación de un gravamen arancelario o de una restricción cuantitativa (contingente o cupo máximo de importaciones), de conformidad con los artículos 27 y 28 del DS. En esa línea, las medidas de salvaguardia constituyen medidas de política arancelaria, la cual, conforme a la Constitución, son de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y corresponde ser regulada vía decreto supremo. En conclusión, la decisión de establecer cuáles son las entidades responsables de investigar, por una parte, y de imponer una medida de salvaguardia, por otra, de acuerdo a lo establecido en los artículos 74° y 118°, inciso 20, de la Constitución Política del Perú, es de competencia del Poder Ejecutivo, en línea con lo señalado por el Tribunal Constitucional (Fundamentos 25 y 26 de la Sentencia recaída en el Exp. N° 1405-2010-PA/TC); por lo que, no corresponde que el Congreso, mediante una Ley, efectúe las modificaciones contenidas en el Proyecto de Ley para otorgar al INDECOPI la competencia para aplicar una medida de salvaguardia.

Asimismo, de manera consistente con lo antes mencionado, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobada por Decreto Legislativo N° 183, modificado por el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 325, dispone que dicho Ministerio, en coordinación con el MINCETUR, es el encargado de regular los aspectos sobre política arancelaria.

En consecuencia, al aplicarse un gravamen arancelario como salvaguardia, resulta claro que, al existir una potestad tributaria asignada constitucionalmente al Poder Ejecutivo respecto al establecimiento, modificación, derogación o imposición de derechos arancelarios (ad valorem y derechos específicos), el instrumento normativo para tal fin sería un decreto supremo; el mismo que, de conformidad con lo señalado en el artículo 5 del Decreto Supremo N° 020-98-ITINCI, es emitido por el MINCETUR y refrendado por los miembros de la Comisión Multisectorial, entre los que se encuentra el Ministro de Economía y Finanzas. Dicho decreto supremo, finalmente es refrendado y promulgado por el Presidente de la República. Por lo tanto, resulta consistente con la Constitución que sea la Comisión Multisectorial la encargada de decidir si aplica o no una medida de salvaguardia o si suspende o revoca una salvaguardia ya impuesta.

Finalmente, concluye que el proyecto de ley N° 1057/2021-CR, que propone la "Ley para consolidar las facultades del INDECOPI en defensa del consumidor y de la producción nacional" NO ES VIABLE.

5.2.5. **De la Sociedad de Comercio Exterior del Perú – COMEX**, remitió su opinión a través de la Carta N° 10-2022/GG/COMEXPERÚ, suscrita por la Señora Jessica Luna Cárdenas, Gerente General de la mencionada entidad; refiere en síntesis, el Proyecto contravendría lo dispuesto en el artículo 74° de la Constitución Política del Perú, ya que, al ser la salvaguardia un gravamen arancelario, se debe respetar la potestad tributaria asignada constitucionalmente al Poder Ejecutivo, y por tanto es ajustado a la norma constitucional que sea la Comisión Multisectorial la encargada de decidir si aplica o no una medida de salvaguardia, y no el INDECOPI como se propone en el Proyecto, ya que actualmente la decisión de aplicar dicha medida se materializa en un decreto supremo emitido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y refrendado por los miembros de la referida Comisión Multisectorial, entre los que se encuentra el Ministro de Economía y Finanzas; siendo, finalmente, refrendado y promulgado por el Presidente de la República.

5.3. Posición de la Comisión

La iniciativa legislativa pretende otorgar al Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, la capacidad técnica de ampliar salvaguardas para proteger al consumidor y la producción nacional. Asimismo, y que estas sean incuestionables e incontrovertibles, por la Comisión Multisectorial creada por Decreto Supremo N° 020-98-ITINCI.

El Proyecto de Ley 1057/2021-CR, pretende que el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, la capacidad técnica de ampliar salvaguardas para proteger al consumidor y la producción nacional. Asimismo, y que estas sean incuestionables e incontrovertibles, por la Comisión Multisectorial creada por Decreto Supremo N° 020-98-ITINCI, ello trasgrede el marco normativo al contener una modificación y no una precisión, debido a que actualmente los artículos 5° y 7° del Decreto Supremo N° 020-98-ITINCI y modificatorias definen de manera clara las competencias de la Comisión Multisectorial, indicando que es la encargada de decidir si aplica o no una medida de salvaguardia o si suspende o revoca una salvaguardia previamente impuesta. Estas decisiones se formalizan mediante Decreto Supremo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, refrendado por los ministros de la Comisión Multisectorial (Economía y Finanzas, y Producción). Además, desconoce las facultades atribuidas a la Comisión Multisectorial; modifica las competencias otorgadas a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI, establecidas en su Ley y Reglamento de Organización y Funciones, pues se le pretende atribuir, entre

otros aspectos, competencias para imponer salvaguardias cuando únicamente cuenta con facultades para realizar investigaciones y emitir informes técnicos.

Asimismo, el Proyecto contravendría lo dispuesto en el artículo 74° de la Constitución Política del Perú, ya que, al ser la salvaguardia un gravamen arancelario, se debe respetar la potestad tributaria asignada constitucionalmente al Poder Ejecutivo, y por tanto es ajustado a la norma constitucional que sea la Comisión Multisectorial la encargada de decidir si aplica o no una medida de salvaguardia, y no el INDECOPI como se propone en el Proyecto, ya que actualmente la decisión de aplicar dicha medida se materializa en un decreto supremo emitido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y refrendado por los miembros de la referida Comisión Multisectorial, entre los que se encuentra el Ministro de Economía y Finanzas: siendo, finalmente, refrendado y promulgado por el Presidente de la República.

5.4. Análisis del marco normativo y efecto de la vigencia de la norma

De los postulados constitucionales señalados en artículos 74° y 118° de la Constitución Política del Estado, se deduce que las salvaguardias se materializan mediante el incremento de la tarifa arancelaria aplicable a las importaciones de determinados productos o a través del establecimiento de un volumen máximo de importaciones, cuyos efectos incidirán en la política de comercio exterior del país. En ese sentido, y en concordancia con las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, la decisión de imponer medidas de salvaguardia en el país corresponde a competencias exclusivas del Poder Ejecutivo, consistentes en dirigir la política exterior y regular las tarifas arancelarias.

5.5. Análisis Costo Beneficio

La Comisión considera que la iniciativa legislativa, adolece de un estudio en términos cuantitativos que permita evaluar el impacto y efecto de la propuesta normativa, situación que permitiría a esta Comisión cuantificar los costos y beneficios, limitándose el ítem de exposición de motivos a señalar que el proyecto de ley no generaría costos para el presupuesto nacional. Situación que impide a esta Comisión contar con elementos suficientes a efectos de analizar el costo y beneficio del proyecto de ley bajo análisis.

VI. CONCLUSIÓN

Por las consideraciones antes expuestas la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, en concordancia con lo dispuesto en el literal c) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda el **ARCHIVO** del Proyecto de Ley N° 1057/2021-CR.

Salvo distinto parecer.

Dese cuenta.
Sala de Comisiones.

Lima, 3 de octubre de 2022.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: BAZAN NARRO Sigrid Tesoro FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/10/2022 12:49:18-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: VARAS MELENDEZ Elias Marcial FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/10/2022 22:28:20-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CICCIA VASQUEZ Miguel Angel FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/10/2022 12:09:32-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CORDERO JON TAY Maria Del Pilar FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/10/2022 13:40:37-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: FLORES ANCACHI Jorge Luis FAU 20161749126 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 06/10/2022 16:29:34-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: BARBARAN REYES Rosangella Andrea FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/10/2022 12:00:23-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TUDELA GUTIERREZ Adriana Josefina FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04/10/2022 17:09:56-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TAIPE CORONADO Maria Elizabeth FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/10/2022 11:25:48-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ALEGRIA GARCIA Luis Arturo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/10/2022 13:19:58-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OBANDO MORGAN Auristela Ana FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/10/2022 15:47:00-0500

ACTA

COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023

TERCERA SESIÓN ORDINARIA

Lunes, 3 de octubre de 2022

Sumilla: Se aprobó por unanimidad:

- *El Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 75/2021-CR*
- *El Dictamen negativo recaído en el Proyecto de Ley 1057/2021-CR*
- *El Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del 19.09.2022*
- *La dispensa del trámite de aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria.*

En la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo del Congreso de la República y a través de la Plataforma Virtual *Microsoft Teams*, siendo las 11 horas con 08 minutos del día lunes 3 de octubre de 2022, se reunieron bajo la presidencia del congresista Elías Marcial Varas Meléndez, los congresistas miembros titulares Adriana Tudela Gutiérrez; Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Auristela Ana Obando Morgan, María Elizabeth Taipe Coronado, Jorge Luis Flores Ancachi, Miguel Ángel Ciccia Vásquez, Sigrid Tesoro Bazán Narro y Arturo Alegría García; participó la congresista María Cordero Jon Tay miembro accesitario. También participaron los congresistas Patricia Juárez Gallegos y Carlos Zeballos Madariaga. Los congresistas Luis Gustavo Cordero Jon Tay; Jorge Alberto Morante Figari y Digna Calle Lobatón y Guillermo Bermejo Rojas presentaron solicitudes de licencia.

El señor Presidente, con el quórum reglamentario, dio inicio a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Periodo Anual de Sesiones 2022-2023.

I. ACTA

El señor Presidente puso a consulta el acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión, la misma que fue aprobada.

II. INFORMES

El señor Presidente informó que durante la semana de Representación se constituyó en las oficinas del Indecopi, Sunass Osiptel y Osinergmin y señaló que el trabajo de éstos dejó mucho que desear en la Región Ancash, señalando que no hay una planificación de las visitas a la jurisdicción y que los consumidores de dicha región están abandonados; dijo también que las cifras que mantienen no reflejan el real estado de las mismas. Explicó que debe establecerse mayores esfuerzos para mejorar la protección de los consumidores e invocó a los miembros de la Comisión para que también puedan hacer este tipo de visitas desde sus regiones.

III. PEDIDOS

El señor Presidente dio cuenta del pedido del Congresista Mori Celis para que el Proyecto de 3100/2022- CR que propone la ley que establece como organismo regulador a la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud - Susalud, sea decretado a la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos para su correspondiente estudio, siendo que el pedido requiere votación, razón por la cual se pasó a la orden del día.

IV. ORDEN DEL DÍA

4.1. Tema: LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE ENERGÍA EN EL PERÚ

El señor Presidente señaló que dentro de la labor fiscalizadora hemos invitado el día de hoy al presidente del Consejo Directivo del Osinergmin para que informe sobre el estado de protección de los usuarios de energía, entiéndase energía eléctrica, gas natural, combustibles, así como para que informe sobre su plan de trabajo.

Informó que el día 30 de septiembre se ha recibido la carta del presidente del Osinergmin delegando su representación en el Ingeniero Julio Salvador Jácome, Gerente General quien está acompañado de los funcionarios: Edwin Quintanilla Acosta, Gerente de Supervisión de Energía - Luis Grajeda Puelles, Gerente de Regulación de Tarifas, y Rosa María Carrillo, secretaria técnica de los órganos resolutivos, a quienes dio la bienvenida, dando la palabra al señor Julio Salvador Jácome.

El señor Julio Salvador Jácome, Gerente General de Osinergmin; mediante el uso de diapositivas empezó su exposición haciendo una introducción, para luego hablar de las funciones del Osinergmin y explicar que en cuanto a alcance tienen 25 oficinas regionales y 20 oficinas desconcentradas; de cómo el Osinergmin está al servicio del ciudadano, explicando sobre regulación, Transparencia, Subsidios, Supervisión, Canales de atención, Reclamo y apelaciones y finalmente sobre los logros obtenidos.

Las diapositivas presentadas constan de 55 páginas en las cuales se señala todo lo expuesto en la sesión.

Sobre la aplicación y supervisión de subsidios en electricidad, referido al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) - GLP, dijo que la compensación representa la entrega de un vale de descuento por S/25 para la compra de un balón de gas (GLP) de hasta 10 kg en locales autorizados. Manifestó que Osinergmin estuvo a cargo del FISE hasta 2020 y que actualmente lo tiene el MINEM.

Osinergmin supervisa la operatividad del fondo: el empadronamiento, la emisión, entrega y canje de vales a los beneficiarios del FISE, así como la difusión del programa por parte de las Empresas de Distribución Eléctrica.

Respecto a supervisiones de gas natural explicó que son 5 Empresas Concesionarias; 1 717 734 Clientes Residenciales; 12 884 Clientes Comerciales; 833 Clientes Industriales; 3 423 Instaladores (Personas Naturales) y 495 Instaladores (Personas Jurídicas).

Sobre los canales de atención dijo que el ciudadano tiene a su disposición diversos canales de atención, a través de los cuales se empodera al ciudadano brindando información sobre sus deberes y derechos como usuarios del servicio público de electricidad y gas natural, así como información referida al sector energía y minería, permitiendo de esta manera ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones.

Mencionando que, a agosto del año 2022, se brindaron un total de 189 226 orientaciones a nivel nacional, de las cuales; el 53% fue a través del canal telefónico, el 22 % corresponde al canal al canal móvil, el 16% corresponde al canal atendido por regiones y el 9% restante mediante el canal virtual.

Sobre Reclamos y apelaciones mencionó que entre los temas que manejan con mayor frecuencia son la negativa a instalación/incremento de potencia/cambio opción tarifaria; Excesivo consumo/Excesiva facturación, Recupero, Cobro indebido, Corte de servicio, Reembolso de aportes o contribuciones, Reubicación de instalaciones bajo responsabilidad

de la concesionaria, Mala calidad: tensión/interrupciones, Deuda de terceros y Otras cuestiones vinculadas a la prestación del Servicio de Electricidad o de Gas Natural.

Finalmente, indicó que se ha dado la implementación de la línea del adulto mayor (WhatsApp). Se trata de nuevo canal exclusivo que facilita la gestión de la presentación del recurso de apelación en los casos relacionados con los servicios públicos de electricidad y gas natural, de manera rápida y oportuna, a fin de agilizar su tramitación ante la instancia que corresponda. Agregó que han reactivado 45 Oficinas (Regionales y desconcentradas) para el fortalecimiento de la atención virtual (atención en idiomas maternos, por videoconferencia con programación de citas).

El señor Presidente invitó a los señores congresistas a formular sus preguntas e inquietudes.

La congresista Auristela Obando Morgan dio a conocer sobre constantes denuncias

El señor presidente señaló que, internacionalmente los precios del petróleo y derivados suben o bajan de acuerdo a las diversas coyunturas que se presentan, lo cual también se refleja en los precios internos de cada país. Dado que, en nuestro país, la baja de los precios internacionales de dichos productos no se refleja completamente en el mercado nacional, ¿Cuál es el papel que juega el OSINERGMIN en este asunto y qué acciones se están tomando, en beneficio de los consumidores, para evitar la suba exagerada de estos productos?

El señor Julio Salvador Jácome, Gerente General de Osinergmin, contestando la pregunta dijo que ellos, en su función supervisora, han transparentado los precios para que los usuarios puedan revisar constantemente los precios de los proveedores y que publican los precios de referencia como señal para el mercado a fin que puedan mejorar las condiciones de competencia en el país.

Así mismo, **el Presidente** señaló que teniendo se cuenta que una de las funciones del Osinergmin es la supervisión de la seguridad de las infraestructuras y las operaciones de la gran y mediana minería formal, ¿qué acciones concretas está tomando el Osinergmin para evitar la contaminación de los ríos producto de los relaves mineros, lo cual produce que el agua potable tenga contenidos de metales pesados por encima de los límites permitidos en las regiones mineras de nuestro país, como es el caso de la región Moquegua y Ancash?

El señor Julio Salvador Jácome, Gerente General de Osinergmin, contestando la pregunta dijo que dentro de su función desde 2012 han perdido la función ambiental en energía y minería y si ven el tema de seguridad en el caso de relaveras han firmado convenios con organismos internacionales para hacer seguimiento a detalle en relaveras para que sean seguras y no generen trastornos a la comunidad.

La Congresista Auristela Obando Morgan, señaló que en continuas visitas tienen reclamos con respecto a los servicios de pago de consumo de electricidad, tratándose de reclamos continuos de medidores, que cuando muestran fallas queman fusibles y las empresas no hacen caso a sus reclamos, agregando que los costos de revisión deben enfrentarlos y ello les resulta oneroso pues está afectando directamente al usuario y a su capacidad económica precisamente a usuarios de escasos ingresos económicos.

El señor Julio Salvador Jácome, Gerente General de Osinergmin, contestando la pregunta pidió hacer llegar los reclamos para hacer los seguimientos respectivos y de ser el caso defender sus derechos sin son atribuibles a las empresas eléctricas.

El señor Presidente señaló que agradecía la presencia de los funcionarios del Osinergmin, sin embargo recalcó que la invitación fue dirigida al señor Presidente del Consejo Directivo del Osinergmin con la debida anticipación y felicitó al ingeniero Omar Chambergo, por su

participación en la 35° edición de Perumin en Arequipa, el evento minero más importante de Latinoamérica. Dijo que el rol principal que tiene Osinergmin es promover el desarrollo de una industria sostenible, asegurando que las operaciones se realicen respetando los protocolos de seguridad para cuidar y proteger la integridad de las personas, evitando también cualquier daño al medio ambiente. En ese sentido, dijo que es preciso mencionar que la invitación cursada para esta III sesión ordinaria se le hizo llegar con la debida anticipación (hace 18 días), obteniendo respuesta recién el último día útil previo a esta sesión, debido a ello, lo exhorto a cumplir con sus funciones y obligaciones que su cargo le demanda y dejar de faltar el respeto al primer poder del estado, representado por esta comisión.

Explicó que le hubiese gustado que el señor Chambergo explique porque es más importante ir a Perumin y dejar de asistir a esta comisión, quizá el señor Chambergo desconoce la problemática que viven actualmente miles de usuarios y consumidores, que tienen que hacer largas colas para abastecer de combustible a sus unidades vehiculares, quizá desconoce los problemas que tiene las amas de casa con el gas, y así una serie de problemas que atraviesa nuestra población.

Finalmente, les reitero el agradecimiento a los funcionarios del Osinergmin y los invitó a retirarse cuando gusten durante el desarrollo de la sesión. Y pidió a la Secretaria Técnica reiterar la invitación al señor Omar Chambergo.

4.2. Sustentación del Proyecto de Ley 2942/2022-CR, por el que se propone la ley que modifica la ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto a la prohibición de llamadas spam, a cargo de la Congresista Patricia Juárez Gallegos.

La Congresista Patricia Juárez Gallegos señaló que los métodos comerciales agresivos o engañosos que usan los proveedores de bienes y/o servicios para promocionar sus productos y/o servicios, van en contra de los derechos del consumidor a través de figuras como el acoso, la coacción, la influencia indebida o el dolo.

Dijo que es un fracaso el registro "Gracias... No insista" que reguló el Indecopi, por ser un registro engorroso, poco amigable y atractivo para los consumidores. El incumplimiento del actual inciso e), debido a que se está entendiendo que el consentimiento previo puede darse durante la llamada, haciendo una interpretación antojadiza de la misma.

Explicó que el numeral 22 del artículo 2 y el artículo 65 de la Constitución Política del Estado justifican constitucionalmente su propuesta. En tal sentido, propone que se prohibidan todas aquellas prácticas comerciales que importen: que los proveedores puedan utilizar centros de llamada (call centers), sistemas de llamado telefónico, envío de mensajes de texto a celular o de mensajes electrónicos masivos para promover sus productos y servicios, así como prestar el servicio de telemercadeo, a ningún consumidor. Sólo podrán enviar información y publicidad a los consumidores que se contacten directamente con el proveedor y soliciten, dando su consentimiento informado, expreso e inequívoco, que desean ser contactados. Sólo en ese caso, los proveedores podrán utilizar aquellos números telefónicos y direcciones electrónicas de consumidores que hayan brindado a los proveedores de dichos bienes y servicios su consentimiento, para la utilización de esta práctica comercial. Este consentimiento puede ser revocado, en cualquier momento y conforme a la normativa que rige la protección de datos personales.

Propone que se debe establecer en el Código que recurrir a esta práctica sin contar con el consentimiento del consumidor, se considerará infracción muy grave y podrá ser sancionado por la Autoridad del Consumidor. Esto sin perjuicio de las competencias de la Autoridad de Datos para el inicio de un procedimiento fiscalizador. Se considerará un agravante que el proveedor se contacte con consumidores considerados vulnerables y la carga de la prueba, en un procedimiento administrativo sancionador, recaerá en el proveedor, quien deberá probar

que cuenta con el consentimiento del consumidor. La Autoridad del Consumidor y la Autoridad de Datos efectuarán acciones educativas y fiscalizadoras conjuntas e informarán anualmente a la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos de las acciones realizadas y sus resultados.

Explicó que si se dieran estas llamadas sin que el consumidor se haya contactado con el proveedor para darle su consentimiento, se considera como una infracción MUY GRAVE; es decir, ya no quedará a criterio del INDECOPI establecer el tipo de sanción, sino que se regula a través del presente proyecto, imponiéndose una multa por la Autoridad del Consumidor que va desde 151 UIT a 450 UIT.

Finalmente destacó que entre los beneficios de su propuesta se daría que millones de peruanos serán beneficiados con el cese de las molestias y del hostigamiento ocasionado por estas llamadas; Las empresas saldrán fortalecidas porque podrán contar con canales de comunicación y publicidad adecuados para llegar a sus clientes y consumidores; Esta iniciativa no irroga gasto alguno al Estado y cumple plenamente con el artículo 79 de la Constitución y con el respeto al Código de Protección y Defensa del Consumidor. A mediano plazo, mejorará considerablemente su relación con los consumidores.

El señor presidente informó que en este tema está a la espera de opiniones que se han solicitado al Indecopi, a Afin; a la Cámara de Comercio de Lima, a la Asociación de Consumidores del Perú – Aspec y a Asbanc.

4.3. Sustentación del Proyecto de Ley 2954/2022-CR, por el que se propone la ley que declara de interés nacional la marca Puno como estrategia de desarrollo sostenible a cargo del Congresista Carlos Zeballos Madariaga.

El Congresista Carlos Zeballos Madariaga señaló que su propuesta tiene por objeto declarar de interés nacional y necesidad pública el registro de la "MARCA PUNO", como estrategia de desarrollo para identificar los productos y servicios que se pretenden distinguir en el mercado de manera exclusiva a nivel nacional e internacional, dada la importancia del patrimonio cultural, histórico y natural de la Región Puno.

Señalando que el Poder Ejecutivo a través de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo en coordinación con el Gobierno Regional, deberán priorizar las acciones necesarias para el registro del signo distintivo, constituido por la denominación; denominativa, como figurativa, ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual — INDECOPI en su calidad de Órgano Público Especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con la finalidad de fortalecer el desarrollo económico regional, la actividad del comercio exterior, del turismo y de la artesanía de la región Puno.

Justificó su propuesta, señalando que el departamento de Puno es la décima región más importante del interior del país, debido a que concentra el 4,5% de la población y el 2,3% de la producción, su economía está basada principalmente en actividades agropecuarias y mineras. Es el mayor exportador de quinua, así como de lana y pelo fino de alpaca de la macro región sur, es exportador de Cañihua, Café, Habas, Textil Confecciones en base a la fibra de alpaca, trucha en sus diferentes presentaciones, minería (estaño), Joyería de Oro y Plata, turismo convencional y el Turismo Rural Comunitario, con sus principales atractivos turísticos: Lago Titicaca con sus Islas de Taquile, Amantani y las Islas Flotantes de los Uros; el Folklore con su diversidad de danzas autóctonas y traje de luces que se manifiestan en sus fiestas patronales y finalmente la gastronomía de Platos Típicos y Gourmet. En el rubro no tradicional, destacan las exportaciones agropecuarias: como la lana de ovino, carne de ovino y carne de vacuno representando el 40.7, 26.5 y 11.5% del total nacional, respectivamente. Además, merecen especial atención los derivados lácteos, debido al dinamismo de las cuencas lecheras de los distritos de Mañazo, Acora, Asillo, Azángaro, Melgar y Taraco.

Explicó de la importancia del registro de una marca radica en su capacidad para vender más y mejor. Por ello con la finalidad de impulsar la creación de la Marca Regional de Puno, se conformó un Comité de Gestión de Trabajo, conformado por diferentes autoridades. Como parte del proceso de creación se llevó a cabo un Concurso denominado representación gráfica de la Marca Puno, organizado por su despacho.

Mencionó que el color celeste representa la tranquilidad y el relax, recuerda elementos como el agua y el cielo. el naranja representa la alegría, el entusiasmo y lo divertido, el morado, se asocia con el lujo, el poder, la sabiduría, la creatividad, y la magia.

Explicó que no colisiona con la carta magna, ni contraviene norma alguna en la legislación peruana, debido a que se trata de una ley declarativa que representa una propuesta de valor para identificar los productos y servicios en el mercado de manera exclusiva a nivel nacional e internacional, con el único objetivo de proyectar una imagen de región productiva y exportadora, bajo los principios de integración e identidad. No genera gasto al erario nacional, y tampoco vulnera las reglas, disposiciones y políticas de disciplina fiscal presupuestaria, pues su único objetivo es el declarar interés público, el registro de la Marca Puno, con la finalidad de consolidar los productos y servicios de la región con potencialidad para la exportación del sector agropecuario, minero y turismo, debido a la contribución de la región en las exportaciones del país.

Finalmente dijo que la propuesta legislativa, se encuentra en armonía con la Tercera Política de Estado. Afirmación de la identidad nacional. Con este objetivo, el Estado: (a) promoverá la protección y difusión de la memoria histórica del país; (b) desarrollará acciones que promuevan la solidaridad como el fundamento de la convivencia, que afirmen las coincidencias y estimulen la tolerancia y el respeto a las diferencias, para la construcción de una auténtica unidad entre todos los peruanos; y (c) promoverá una visión de futuro ampliamente compartida, reafirmada en valores que conduzcan a la superación individual y colectiva para permitir un desarrollo nacional armónico y abierto al mundo.

El señor presidente informó que se han solicitado opiniones al Indecopi; al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a la PCM, al Gobierno Regional de Puno y a Especialistas en Derecho de Marcas.

Así mismo como le corresponde sustentar dos proyectos de ley de su autoría pidió a la congresista Adriana Tudela Gutiérrez que asuma la presidencia en su calidad de secretaria de la Comisión.

La señorita presidente Adriana Tudela Gutiérrez asumió la conducción de la sesión a partir de dicho momento.

4.4. Sustentación del Proyecto de Ley 3011/2022-CR, por el que se propone la ley que amplía la vigencia del pasaporte electrónico ordinario a diez (10) años, en favor de los usuarios y consumidor a cargo del Congresista Elías Varas Meléndez.

El señor Congresista Elías Varas Meléndez dijo que durante los últimos meses, vemos como miles de usuarios y consumidores vienen siendo perjudicados respecto a la entrega oportuna de sus pasaportes en los centros autorizados por la Superintendencia Nacional de Migraciones, esta problemática no hace más que evidenciar una inadecuada e ineficiente gestión integral para la adquisición de los pasaportes, todo esto en los últimos días, se ha materializado a través de la ejecución de una acción de control por parte del Órgano de Control Institucional de la Superintendencia Nacional de Migraciones, con el objeto: "Determinación del procedimiento de selección para la adquisición de libretas de Pasaporte Electrónico y Láminas de Seguridad, en el periodo 2021, del Informe de Control Específico N° 012-2022-2-5996-SCE se detalla la relación de personas comprendidas en actos irregulares, en el marco

de la acción de control ejecutada, encontrándose responsabilidad administrativa funcional, debido a la dilación de los plazos de manera injustificada para la determinación del tipo de proceso de selección, que resultó con un desabastecimiento de libretas de pasaportes electrónicos generando una afectación al servicio de emisión y entrega de pasaportes electrónicos, así como la vulneración al derecho de libre tránsito del usuario para salir del país.

Respecto a la vigencia de los pasaportes en América Latina y el mundo, señaló que es importante mencionar que se aprecia una tendencia casi estándar en cuanto al tiempo de vigencia de los pasaportes. Explicó que se busca ampliar la vigencia del pasaporte electrónico ordinario a diez (10) años, en favor de los usuarios y consumidores, a fin de evitar situaciones similares a las descritas en la problemática antes desarrollada, tal y como lo vienen haciendo otros países de la región y el mundo, donde no se aprecia una problemática similar respecto a la emisión de pasaportes.

Consideró que así se solucionaría y garantizaría que los usuarios y consumidores no tengan que estar renovando cada cinco (05) años sus pasaportes electrónicos ordinarios, con lo cual, permite que el Estado haga más eficiente su proceso de selección y adquisición. La norma, no genera gasto ni costos adicionales al erario nacional, toda vez que los costos asociados por concepto de expedición y revalidación de pasaportes peruanos debe sujetarse única y exclusivamente al gasto real y efectivo en que incurra la entidad emisora por el servicio prestado durante la tramitación.

Explicó que se entiende tácitamente que para la Superintendencia Nacional de Migraciones no tendrá un impacto económico negativo, debido a que dicha tramitación, no se considera como una fuente de recaudación de ingresos, al tratarse de un servicio público sin fines de lucro que el Estado asume. Dada la coyuntura y problemática actual, un beneficio adicional será que los usuarios ya no tengan que hacer largas colas de espera para tramitar su pasaporte electrónico ordinario, ya que el plazo de caducidad se extenderá de cinco (05) a diez (10) años y la entidad responsable tendrá el tiempo necesario para gestionar la adquisición de los mismos.

4.5. Sustentación del Proyecto de Ley 3049/2022-CR, por el que se propone la ley que crea la Ventanilla Única del Consumidor, a cargo del Congresista Elías Varas Meléndez

El señor Congresista Elías Varas Meléndez , inició su exposición señalando que en la actualidad los usuarios de servicios públicos es decir la mayoría de los ciudadanos no tienen pleno conocimiento de dónde y cómo deben presentar sus reclamos, no saben por ejemplo que, si la empresa eléctrica rechaza su reclamo, tienen la posibilidad de recurrir ante el Osinergmin; si la empresa de agua rechaza su reclamo le queda la instancia a cargo de la Sunass, o si la empresa de celular rechaza su reclamo pueden recurrir ante el Osiptel.

Dijo que la población en su mayoría no conoce a los organismos reguladores Osiptel, Sunass, Osinergmin, Ositran. La existencia de los diferentes Organismos Reguladores, las instituciones públicas y privadas a cargo de dar respuesta a los reclamos de los consumidores y hasta el propio Indecopi hacen que el ciudadano común no tenga claro que instituciones son las competentes para dar respuesta a dichos reclamos. Esta situación se solucionaría a través de una Ventanilla única del Consumidor, para que el ciudadano consumidor sepa siempre donde dirigirse a iniciar su reclamo, independientemente del servicio o bien reclamado.

Explicó que su planteamiento es que utilizando los Centros de Mejor Atención al Ciudadano llamados MAC que son esas plataformas que ya el Poder Ejecutivo viene operando desde hace unos años puedan albergar a todos los organismos reguladores a fin de que los usuarios y consumidores puedan utilizarlas para que en dichos Macs funcionen la Ventanilla Única del Consumidor. Esta ventanilla Única no sólo sera virtual sino también física porque sabemos

que tenemos consumidores vulnerables que no tienen acceso al internet o que desconocen la utilización de las nuevas tecnologías como son nuestros adultos mayores.

Dijo ser consciente de que como congresistas no tiene iniciativa de gasto, por ello este Proyecto de Ley inicia declarando de interés nacional la creación e implementación inmediata de la Ventanilla Única del Consumidor. La Ventanilla Única del Consumidor tendría por finalidad promover y facilitar la presentación y el tratamiento de los reclamos de los consumidores.

Serían funciones de la Ventanilla Única del Consumidor: a) Recibir los reclamos interpuestos a nivel nacional, a los efectos de su asignación y derivación; b) Informar a los consumidores respecto del estado de su reclamo. c) Articular con los organismos reguladores de los servicios públicos, el Indecopi y demás instituciones públicas o privadas competentes en el tratamiento de reclamos de consumo y d) Llevar la estadística de los reclamos interpuestos por los consumidores.

Finalmente, dijo que propone el Poder Ejecutivo reglamentaría la Ley en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendarios. Y que este es un primer paso en lo que ha llamado la democratización de la defensa y protección del consumidor pues ses de la idea que la sociedad en su conjunto debe estar involucrada porque finalmente todos somos consumidores.

La señorita presidente felicitó las iniciativas planteadas por el señor congresista Varas Meléndez y devolvió la conducción de la sesión al presidente.

El Señor presidente informó que respecto de la iniciativa de la Ventanilla Única del Consumidor se está a la espera de opiniones y se han solicitado las opiniones a la PCM, Osinergmin, Ositran, Osiptel; Sunass y al Indecopi en su calidad de autoridad de consumo.

5.1. Sustentación del Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 75/2021-CR que, con texto sustitutorio, propone la ley que modifica el Decreto Legislativo 1280, Ley Marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, para proteger a los usuarios residenciales ante lecturas atípicas en la facturación del servicio de agua potable.

El Señor presidente sustentó el predictamen señalando que la propuesta legislativa tiene las siguientes aspiraciones: 1. pretende garantizar el cobro de una tarifa social por el servicio de agua y alcantarillado a las entidades del estado; 2. pretende que los usuarios ante la existencia de consumos atípicos tengan el derecho irrenunciable de presentar reclamos ante la autoridad competente sin límites a las eventualidades que pueda sufrir durante un año y a obtener nuevas facturaciones conforme al consumo histórico en caso de resultar procedente; 3. pretende que el valor del uso del agua residual tratada para el riesgo y mantenimiento de áreas verdes a ser cobrada a las entidades del estado tendrá un valor diferenciado menor respecto del resto de las categorías.

La comisión ha realizado el análisis del impacto y los efectos que causaría la propuesta en cuanto a sus 3 objetivos, también ha recibido las opiniones de Sunass; Ministerio de Vivienda, PCM, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente y la Autoridad Nacional del Agua-ANA; y de dicho análisis concuerda con dichas instituciones en que afectaría el esquema de subsidios cruzados, pretender que las entidades del estado sólo paguen tarifa social es decir implicaría que se reduzca el subsidio de usuarios de las categorías social y doméstica del primer y segundo rango. consideramos que se perjudicaría a usuarios de las demás categorías de la estructura tarifaria, ya que se incrementarían sus tarifas para subsidiar a las entidades del estado y por último también se perjudica económicamente a las empresas prestadoras de servicios.

Respecto a los consumos atípicos, actualmente el marco normativo lo limita a tres oportunidades al año que se pueda reclamar, por lo que la modificación consiste en que el usuario pueda reclamar sin límite de eventualidades no modificaría el accionar del usuario ni de la empresa prestadora. la comisión considera que es oportuno incluirlo en el decreto legislativo en modificación y de esta forma elevándolo a dicha categoría legal y en ese sentido acoger la iniciativa legislativa, aclarando que esto sólo es aplicable a usuarios residenciales y señalando que no debe existir limitación a la presentación de reclamos, considerando que el control de consumos atípicos del servicio de agua potable en la facturación por promedio es excepcional. es importante mencionar que el problema es atribuible al usuario, pero cuando este ha sido diligente en reparar la fuga no debe castigado con el pago del real consumo.

La comisión respecto de la propuesta de modificación referido a la retribución por el vertimiento de aguas residuales en un cuerpo receptor, que se trata del tratamiento de aguas residuales para reúso. al respecto la comisión y las instituciones que han opinado concluyen que no existe tarifa por el servicio de tratamiento de aguas residuales para reúso en el riego de parques y jardines, por lo que en ese extremo no se acoge la iniciativa.

Finalmente señaló que este proyecto tiene como comisión principal a la comisión de vivienda que ha aprobado ya un dictamen favorable y con el fin de no retrasar más su debate en el pleno, propongo a ustedes colegas aprobar el texto sustitutorio que propone el predictamen que ha sido repartido oportunamente.

El Señor presidente dio por culminado la sustentación y abrió el debate, invitando a los miembros de la Comisión a intervenir, no habiendo solicitud de intervenciones dio pase a la votación nominal.

Del resultado de la votación nominal, el dictamen fue aprobado por unanimidad, con 10 votos a favor de los señores congresistas Elías Marcial Varas Meléndez, Adriana Tudela Gutiérrez, Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Auristela Ana Obando Morgan, María Elizabeth Taipe Coronado, Jorge Luis Flores Ancachi, Miguel Ángel Ciccia Vásquez, Sigrid Tesoro Bazán Narro, Arturo Alegría García y la congresista María Luisa Cordero Jon Tay quien como miembro accesitario votó por la licencia del congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay.

4.6. Sustentación del Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1057/2021-CR que, propone la ley para consolidar las facultades del Indecopi en defensa del consumidor y de la producción nacional.

El Señor presidente sustentó el predictamen señalando que en el proyecto de ley 1057/2021, mediante acuerdo del Consejo Directivo se actualizó el proyecto de ley 7362/2020-Cr, siendo derivado a la comisión de Defensa del Consumidor y a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

Dijo que, de las opiniones recibidas por el Indecopi, Ministerio de la Producción – Produce, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad de Comercio Exterior Comex, todas las opiniones recibidas tienen opinión negativa.

Dijo que el proyecto propone otorgar al Indecopi, la capacidad técnica de aplicar salvaguardas, es decir, precisa que los hallazgos o comprobaciones de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de barreras comerciales no arancelarias del Indecopi, con respecto al cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos para imponer salvaguardias provisionales y/o definitivas en el marco de la organización mundial de comercio, sean incuestionables e incontrovertibles por la comisión multisectorial creada por decreto supremo n°020-98-itinci, que está conformada por los ministros de estado de las carteras de Comercio Exterior y Turismo, Economía y Finanzas y del sector al que corresponde la rama de producción nacional afectada.

Explicó que del análisis realizado se concluye que la propuesta trasgrede el marco normativo debido a que actualmente los artículos 5° y 7° del Decreto Supremo N° 020-98-itinci y modificatorias definen de manera clara las competencias de la comisión multisectorial, indicando que es la encargada de decidir si aplica o no una medida de salvaguardia o si suspende o revoca una salvaguardia previamente impuesta. estas decisiones se formalizan mediante decreto supremo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, refrendado por los ministros de la comisión multisectorial (Economía y Finanzas, y Producción). además, la propuesta legislativa desconoce las facultades atribuidas a la comisión multisectorial; modifica las competencias otorgadas a la comisión de fiscalización de dumping y subsidios del Indecopi, establecidas en su ley y reglamento de organización y funciones, pues se le pretende atribuir, entre otros aspectos, competencias para imponer salvaguardias cuando únicamente cuenta con facultades para realizar investigaciones y emitir informes técnicos.

Asimismo, explicó que el proyecto contraviene lo dispuesto en el artículo 74° de la constitución política del Perú, ya que, al ser la salvaguardia un gravamen arancelario, se debe respetar la potestad tributaria asignada constitucionalmente al poder ejecutivo, y por tanto es ajustado a la norma constitucional que sea la comisión multisectorial la encargada de decidir si aplica o no una medida de salvaguardia, y no el Indecopi, a través de su comisión de dumping, subsidios y eliminación de barreras comerciales no arancelarias. Por las consideraciones antes expuestas, se recomienda el archivo del proyecto de ley 1057/2021-CR.

El Señor presidente dio por culminado la sustentación y abrió el debate, invitando a los miembros de la Comisión a intervenir, no habiendo solicitud de intervenciones dio pase a la votación nominal.

Del resultado de la votación nominal, el dictamen fue aprobado por unanimidad, con 10 votos a favor de los señores congresistas Elías Marcial Varas Meléndez, Adriana Tudela Gutiérrez, Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Auristela Ana Obando Morgan, María Elizabeth Taipe Coronado, Jorge Luis Flores Ancachi, Miguel Ángel Ciccia Vásquez, Sigrid Tesoro Bazán Narro, Arturo Alegría García y la congresista María Luisa Cordero Jon Tay quien como miembro accesitario votó por la licencia del congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay.

Seguidamente, solicitó la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión, el mismo que fue votado a micrófono abierto, sin ninguna oposición, aprobándose por unanimidad.

El señor Presidente levantó la Tercera Sesión Ordinaria, siendo las 13 horas con 11 minutos.

ELÍAS MARCIAL VARAS MELÉNDEZ
Presidente

ADRIANA TUDELA GUTIÉRREZ
Secretario

La trascripción magnetofónica que elabora el Área de Transcripciones del Departamento del Diario de Debates del Congreso de la República, es parte integrante de la presente Acta.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: VARAS MELENDEZ Elias Marcial FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/10/2022 11:20:53-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TUDELA GUTIERREZ Adriana Josefina FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/10/2022 10:11:37-0500